

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
4158/2021.**

**QUEJOSA Y RECURRENTE:
LICENCIAS Y SERVICIOS
AUDIOVISUALES, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.**

**TERCERA INTERESADA:
HOTELERA DE LA PARRA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE.**

VISTO BUENO
SR. MINISTRO

PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

COTEJÓ

SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintitrés de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS los autos para dictar sentencia en el amparo directo en revisión **4158/2021**.

RESULTANDO:

1. **PRIMERO. Juicio de amparo directo ***** y su relacionado *******. Por escritos presentados el veintiuno de abril y seis de mayo, ambos de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Unitarios en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, tanto la actora Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la demandada Hotelera de la Parra, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente, solicitaron el amparo y protección de la Justicia

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4158/2021

Federal contra la sentencia de trece de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en el toca de apelación ***** y su acumulado *****.

2. Correspondió conocer de las demandas de amparo directo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien mediante proveídos de veinte y veintisiete de mayo, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente, las admitió a trámite, radicándolas con los números AD ***** y su relacionado AD *****. En cada uno de dichos acuerdos se dio intervención a las demás partes y al agente del Ministerio Público de su adscripción, y realizó las demás previsiones de ley.
3. Cabe destacar que, mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintiuno, la contraparte de la quejosa Hotelera de la Parra, Sociedad Anónima de Capital Variable (tercera interesada) promovió demanda de amparo adhesivo en relación con el principal AD ***** , misma que fue admitida a trámite por auto de quince del mismo mes y año.
4. **Sentencia del Tribunal Colegiado.** Agotado el procedimiento, el doce de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia en la que negó la protección constitucional a la quejosa principal y sobreseyó en el juicio de amparo adhesivo promovido por la tercera interesada por lo que respecta al amparo directo *****; mientras que en relación con su acumulado ***** , también negó el amparo solicitado por la quejosa.
5. **SEGUNDO. Recurso de revisión.** Inconforme con la sentencia dictada en el juicio de amparo directo ***** , la quejosa Licencias y

Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de revisión, y una vez que el órgano de amparo dio curso al escrito de revisión, fue recibido en la Oficina de Correspondencia y Certificación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite el medio de impugnación turnándolo a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, enviándolo para su radicación en la Primera Sala.

6. **TERCERO. Avocamiento.** En proveído de primero de febrero de dos mil veintidós, la Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto, y ordenó la remisión de los autos a la ponencia designada, para la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

7. **PRIMERO. Competencia.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Máximo Tribunal, publicado en dicho órgano oficial de difusión el veintiuno de mayo de dos mil trece. Lo anterior, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia civil, dictada por un tribunal colegiado de circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Sala, sin que sea necesaria la intervención del

Tribunal Pleno.

8. **SEGUNDO. Oportunidad.** La sentencia de amparo recurrida se notificó a la recurrente a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, el **veinticinco de agosto de dos mil veintiuno**¹; dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el **veintiséis de ese mismo mes y año** en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de diez días que establece el diverso 86 para la interposición del recurso de revisión, transcurrió del **veintisiete de agosto al nueve de septiembre de dos mil veintiuno**, sin contar los días veintiocho y veintinueve de agosto y cuatro y cinco de septiembre, por haber sido inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la misma ley, y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
9. En tales condiciones, al haberse presentado el recurso de revisión **el seis de septiembre de dos mil veintiuno** ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, su interposición se hizo dentro del plazo legal.
10. **TERCERO. Legitimación.** El recurso de revisión lo hace valer Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado *********, persona moral quejosa en el juicio de amparo directo, por lo que en su calidad de parte formal y material cuenta con legitimación en la causa para interponerlo; y el apoderado que suscribe tiene reconocida su personalidad como se advierte de la escritura pública que anexa a su escrito de revisión.

¹ De las constancias que integran el expediente electrónico del amparo directo *********, únicamente se advierte el acuse electrónico del envío de la notificación a la parte quejosa y no la constancia de notificación personal. No obstante, la sentencia recurrida fue notificada por lista el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, por lo que aún cuando se tome como referencia para el cómputo dicha fecha, la presentación del recurso resulta oportuna.

11. **CUARTO. Antecedentes.** Los necesarios para conocer el asunto, se precisan enseguida.

Juicio ordinario civil. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable demandó de Hotelera de la Parra, Sociedad Anónima de Capital Variable, las prestaciones siguientes:

*“A) La declaración judicial de que la Demandada violó el derecho patrimonial de comunicación pública (derecho de autor) por poner a disposición de sus huéspedes y retransmitir dentro de las habitaciones del “*****” obras audiovisuales sin autorización de Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, durante el mes de febrero de 2017.*

*B.- La reparación del daño por el uso no autorizado de las obras audiovisuales materia de la presente demanda, a razón de una cantidad equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la facturación total del “*****” que hubiera recibido la Demandada durante todo el mes de febrero de 2017. Dicha cantidad deberá cuantificarse en ejecución de sentencia, en términos del artículo 216 Bis de la Ley Federal de Derechos de Autor.*

C.- La orden judicial de la Demandada se abstenga de retransmitir y poner a disposición de sus huéspedes las obras audiovisuales distribuidas en México por Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin la previa licencia de derechos de autor.

D.- Los gastos y costas que se ocasionen por el presente litigio.”

Correspondió el conocimiento del asunto al Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por auto de tres de mayo de dos mil diecisiete, radicó la demanda con el número *****; no obstante, la desechó al considerar que la actora incurrió en diversas imprecisiones que hacían imposible subsanarlas a través de una prevención.

Recurso de apelación. Inconforme con esa decisión, la actora Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil diecisiete, interpuso recurso de apelación, del cual por razón de turno conoció el entonces Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, quien dictó sentencia el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete en el toca ***** , donde revocó el auto impugnado.

Resolución en cumplimiento. Mediante proveído dictado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México agregó a los autos la sentencia dictada por el Tribunal Unitario y, en cumplimiento a lo ahí ordenado, determinó inhibirse en el conocimiento del asunto por carecer de competencia en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles y del artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor; en consecuencia, desechó la demanda.

Segundo recurso de apelación. Nuevamente inconforme con el proveído indicado en el párrafo que antecede, por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la demandante interpuso recurso de apelación, del que volvió a conocer el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, quien en sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil diecisiete en el toca ***** , revocó el auto recurrido.

Admisión de la demanda. En proveído dictado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito del conocimiento en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada admitió a trámite la demanda con la cual ordenó correr traslado y emplazar a Hotelera de

la Parra, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que en el término de nueve días produjera su contestación, de conformidad con los artículos 305 y 327 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete se tuvo a Hotelera de la Parra, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus apoderados, dando contestación a la demanda formulada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que estimó necesarias.

Mediante acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil diecinueve, el juez federal del conocimiento ordenó llamar como tercera interesada a *********, para que dentro del término de nueve días compareciera a deducir sus derechos. Por auto de dieciocho de diciembre siguiente, se tuvo a dicha tercera dando contestación a la demanda y oponiendo las defensas que estimó pertinentes, con lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Seguidos los trámites legales correspondientes, el veintitrés de julio de dos mil veinte, el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dictó sentencia definitiva conforme a los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio.

SEGUNDO. Resultó procedente la vía ordinaria civil, a través de la cual Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó a Hotelera de la Parra, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que la actora haya acreditado tener legitimación activa en la causa.

TERCERO. Se absuelve a la demandada de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia.

CUARTO. El presente fallo no le para perjuicio a la tercera
******.*

QUINTO. Se condena a la actora al pago de las costas erogadas con motivo del trámite de este juicio, que serán cuantificadas en ejecución de sentencia.”

Recursos de apelación. Por no estar de acuerdo con la sentencia referida, tanto la actora Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, como la tercera llamada a juicio *******, interpusieron sendos recursos de apelación, de los cuales correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, quien dictó sentencia en los autos del toca ******* y su acumulado ******* el trece de abril de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente:

*“PRIMERO.- Se revoca la sentencia definitiva de veintitrés de julio de dos mil veinte, dictada por el titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil ***** , promovido por Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra Hotelera de la Parra, Sociedad Anónima de Capital Variable.*

SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas en esta segunda instancia.

TERCERO.- Notifíquese a las partes como proceda conforme a la ley; comuníquese al juzgado de origen, a través de oficio y con copia autorizada de la presente resolución; solicitándole tenga a bien acusar el recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.”

La revocación del fallo de primera instancia, se ordenó en los siguientes términos:

“PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada por la actora Licencias y Servicios Audiovisuales, sociedad anónima de capital variable.

SEGUNDO. Se declara que la demandada Hotelera de la Parra, sociedad anónima de capital variable, trasgredió el derecho patrimonial (derecho de autor) de la actora.

TERCERO. Se condena a la demandada a la reparación del daño por el uso no autorizado, durante el mes de febrero de dos mil diecisiete, de las obras audiovisuales protegidas “Corazón Indomable”, “Como dice el dicho”, “Cero en conducta”, “La rosa de Guadalupe”, “La hora pico”, “María de todos los Ángeles”, “41 El hombre perfecto”, “El gran Makakikus”, “Del brazo y por la calle”, “Caravana de la muerte”, “Pepito as del volante”, “Del can can al mambo”, “Santo contra los jinetes del terror”, “Pepito y el monstruo”, cuya titularidad de derechos patrimoniales acreditó la actora (con exclusión de la obra “La escuelita VIP”); lo que se traduce en el pago del costo de la licencia que el demandado debió adquirir para hacer uso autorizado por un mes y en las habitaciones de su hotel, de las citadas obras, lo que deberá liquidarse en ejecución de sentencia atendiendo a las bases definidas.

CUARTO. Se condena a la demandada a que se abstenga de poner a disposición y retransmitir a sus huéspedes, sin previa licencia de derechos de autor, las obras audiovisuales cuya titularidad ostenta la actora.

*QUINTO. El presente fallo no le para perjuicio a la tercera *****.*

SEXTO. Se absuelve a las partes del pago de gastos y costas de primera instancia.”

Juicio de amparo directo. En contra de la sentencia indicada en el párrafo inmediato anterior, tanto la parte actora como la demandada, promovieron sendos juicios de amparo directo, los cuales fueron sustanciados y resueltos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4158/2021

Civil del Primer Circuito, bajo el expediente número ***** y su relacionado *****.

12. Sin embargo, en lo que interesa para la resolución del presente recurso de revisión, **solo se analizará lo atinente al amparo directo** *****, promovido por Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia en la que negó la protección constitucional a la quejosa principal y sobreseyó en el juicio de amparo adhesivo promovido por la tercera interesada.
13. Para conocer la materia del juicio de amparo directo, es pertinente conocer los conceptos de violación, y las consideraciones de la sentencia de amparo que ahora se recurre.

Conceptos de violación.

PRIMERO. La quejosa señala que el fallo reclamado contraviene el derecho a una justa reparación.

Al respecto alega que el Tribunal Unitario responsable concluyó que la indemnización debería cuantificarse conforme al cuarenta por ciento (40%) del precio de una licencia para usar obras audiovisuales en hoteles, durante el periodo comprendido al mes de febrero de dos mil diecisiete. Sostiene que dicha determinación vulnera sus derechos dado que el monto resulta tan mínimo que constituye un incentivo para violar derechos de autor.

Manifiesta que si un hotel es responsable y cumple con los lineamientos de la Ley Federal del Derecho de Autor está obligado a pagar a la actora el cien por ciento (100%) del precio de la licencia; pero si un hotel no cumple con tales lineamientos, transgrediendo derechos de autor, sólo tiene que pagar el cuarenta por ciento (40%) del precio de la licencia, es decir, con la resolución del Tribunal Unitario se está premiando al hotel que viola la ley al otorgarle un descuento del sesenta por ciento (60%) del precio de la licencia.

De manera que el tribunal responsable yerra al momento de efectuar la interpretación del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor; puesto que dicho precepto tiene su antecedente en el artículo 156 de la ley anterior, donde se establecía que la indemnización es el

cuarenta por ciento (40%) de los ingresos del pirata (violador de derechos), no del cuarenta por ciento (40%) de los ingresos que debió recibir el titular de derechos. De forma que con dicho criterio no se repara el daño sufrido por la actora pues ni siquiera se llegaría al cobro del cien por ciento (100%) del precio de la licencia en situaciones ordinarias.

SEGUNDO. El tribunal responsable debió interpretar el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor actual, y no el diverso 156 de la legislación abrogada.

Al respecto señala, a manera de antecedentes que, cuando se publicó la actual Ley Federal del Derecho de Autor en mil novecientos noventa y seis, su texto no contemplaba disposición alguna sobre la reparación de los daños y perjuicios, lo que significaba que debía acudir a los criterios generales de indemnización previstos en los artículos del Código Civil Federal.

Sostiene que, a partir de ello, el Senado en su dictamen del año dos mil tres, adicionó el artículo 216 Bis a la ley vigente, para traer una fórmula que permitiera un cuarenta por ciento (40%) de forma justa, por lo que ya no habla de “producto”, sino de “servicios” que impliquen violación de derechos de autor.

Por tanto, el Tribunal Unitario incorrectamente estableció que la indemnización debía hacerse con base en los “productos”, cuando en realidad debe efectuarse a partir de los “servicios”, pues la violación del hotel no ocurre porque éste haya vendido tales “productos”, sino que prestó los “servicios” de hospedaje; y esa actividad fue la que vulneró los derechos de autor de la demandante.

TERCERO. La quejosa sostiene que la indemnización debe realizarse con base en los ingresos generados por la prestación de los servicios.

Indica que la autoridad responsable realizó una incorrecta interpretación gramatical para saber cómo debía calcularse la indemnización. Lo anterior, en virtud de que los elementos para cuantificar la reparación consistían en el porcentaje (40%) y el precio aplicado a la prestación de ciertos servicios (hospedaje); de manera que la cantidad a la que se debió condenar a la enjuiciada debió ser el cuarenta por ciento (40%) del precio obtenido por prestar los servicios de hospedaje que fueron los que implicaron violación a derechos de autor, esto es, sobre todos los ingresos que obtuvo el hotel.

Señala que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió el amparo directo en revisión *****, en donde se concluyó que el artículo 216 Bis, se refería a la totalidad de los ingresos obtenidos por el establecimiento (precio de entrada, bebidas y

alimentos), lo que claramente contradice la conclusión alcanzada por el tribunal responsable.

Consideraciones de la sentencia de amparo ***:**

El Tribunal Colegiado del conocimiento declaró ***inoperantes por insuficientes*** los conceptos de violación, ya que la peticionaria del amparo no combatió frontalmente todas las consideraciones en que se apoyó la sentencia dictada por el tribunal de alzada.

Para ello, luego de reseñar los conceptos de violación expresados por la quejosa, sintetizó cada una de las consideraciones plasmadas por el tribunal responsable para determinar la forma en que debía ser cuantificada la reparación del daño material por violación a la Ley Federal del Derecho de Autor, lo que hizo de la siguiente manera:

- El artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que la reparación del daño en ningún momento será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por ese ordenamiento.
- Ese numeral fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de dos mil tres, cuyo proceso legislativo, específicamente, el dictamen de la cámara de origen de Senadores, estableció que la decisión de adicionar el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor fue con el objetivo de reestablecer los criterios de la reparación del daño material originados por la violación de los derechos tutelados por la ley, que estaban consignados en el artículo 156 de la legislación anterior, de manera que se garantizara que la indemnización correspondiera a la magnitud del daño ocasionado.
- Por eso es necesario precisar que la anterior legislación autoral denominada Ley Federal sobre el Derecho de Autor, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis en el Diario Oficial de la Federación, fue modificada mediante decreto publicado el veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y tres en el mismo órgano de difusión público, para adicionar el artículo 156. En dicha exposición el legislador dispuso que la cantidad mínima por reparación del daño correspondería al cuarenta por ciento que se aplicaría al precio de venta al público de cada ejemplar, multiplicado por el número de ejemplares que se hayan hecho de la reproducción ilegal.
- La intención del creador de la norma fue establecer un procedimiento en el que el porcentaje se aplicara al precio de la obra original y,

posteriormente, se multiplicara por el número de veces en que se utilizó de forma ilegal la obra original; es decir, ese procedimiento se componía de dos elementos: 1) un porcentaje, y 2) un número de utilización ilegal del producto, que da como resultado los ingresos que el titular del derecho autoral debió percibir si se hubiera observado la ley.

- El creador de la norma no pretendió que el cuarenta por ciento se aplicara a los ingresos del trasgresor del derecho, pues ni siquiera mencionó dicha variante en la norma legal.
- De ese modo, si en la ley autoral vigente, el legislador tuvo la intención de restablecer los criterios de la reparación del daño material consignados en la legislación anterior, al adicionar el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, debe entenderse que el espíritu de los parlamentarios fue establecer nuevamente, como mínima, la cifra resultante del procedimiento que consiste en aplicar el cuarenta por ciento al precio de la obra original y posteriormente, multiplicarla por el número de veces en que se utilizó de forma ilegal la obra original.
- El procedimiento de cuantificación de la cantidad mínima por concepto de reparación del daño material corresponde a que se aplique el cuarenta por ciento al precio de venta al público del producto original y después multiplicarlo por el número de veces en que se utilizó de forma ilegal el referido producto; es decir, obtener el cuarenta por ciento del ingreso que el titular del derecho debió recibir en caso de no haberse violado la ley.
- Por tanto, el mecanismo para la cuantificación arroja las siguientes variables: a) Porcentaje, b) Precio de venta al público del producto original y, c) Un número que corresponda a las veces o lapso de tiempo en que se utilizó el producto original de forma ilegal.
- Por eso es incorrecta la forma que propone la actora para obtener la cantidad mínima por reparación del daño, consistente en la aplicación del cuarenta por ciento sobre los ingresos totales del demandado por concepto del servicio de hospedaje que comprendió la puesta a disposición de las obras audiovisuales cuya licencia ostenta, ya que la norma nunca prevé la aplicación del cuarenta por ciento a los ingresos del trasgresor de la norma, sino que se debe aplicar el precio de venta al público del producto original, en este caso, la licencia de uso respectiva.
- El procedimiento propuesto por la actora contemplaría elementos ajenos al daño del derecho patrimonial, esto es, factores diferentes a la indebida puesta a disposición de las obras audiovisuales, como lo

sería el propio costo del hospedaje, así como otros beneficios y ventajas contempladas en ese servicio, por ejemplo, alimentos, botellas de agua, vino, ubicación de la habitación, estacionamiento, luz, agua, etcétera, así como otras obras audiovisuales y musicales distintas de las que ostenta la actora, que también pudieron ser reproducidas en los televisores de las habitaciones, cuyo precio sería incorrecto englobar para cuantificar la reparación del daño, lo que derivaría en una cantidad desproporcionada.

- La acción de reparación del daño no se trata de una sanción (que sí sería materia en la vía administrativa), sino de un reembolso de las cantidades que se dejaron de percibir o que mermaron el patrimonio del actor, máxime que, el dispositivo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, expresamente señala que el cuarenta por ciento se aplicará sobre el precio de venta al público del producto original y no sobre los ingresos del demandado, además, de que se evidenció que la intención del legislador fue aplicar ese porcentaje al ingreso que el titular del derecho debió recibir en caso de no haberse violado la ley.
- Al respecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó que si bien la quejosa se duele diciendo que la autoridad responsable - para resolver como lo hizo- interpretó el artículo 156 de la anterior Ley Federal de Derechos de Autor (abrogada) y no el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, cuando la fórmula que establece cada uno de esos numerales es distinta, que basta una interpretación gramatical para saber cómo debe calcularse la indemnización y que por eso, la indemnización debe ser el cuarenta por ciento del precio de la prestación de servicios que impliquen violación a derecho de autor, lo que evidencia que la indemnización deber ser el cuarenta por ciento del precio obtenido por el hotel por prestar sus servicios de hospedaje, los cuales implicaron violación a derechos de autor.
- Sin embargo, nada dijo para contradecir que el procedimiento propuesto por la accionante, contemplaría elementos ajenos al daño del derecho patrimonial, es decir, factores diferentes a la indebida puesta a disposición de las obras audiovisuales, como el costo del hospedaje, así como otros beneficios y ventajas contempladas en esos servicios, como alimentos, botellas de agua, vinos, ubicación de la habitación, estacionamiento, luz, agua, etcétera, así como otras obras audiovisuales y musicales distintas de las que ostenta la actora que también pudieron ser reproducidas en los televisores de las habitaciones y cuyo precio sería indebido englobar para cuantificar la reparación del daño.
- Tampoco combate lo expuesto por la autoridad responsable en el sentido de que la aplicación del mecanismo planteado por la actora podría resultar en una cantidad desproporcional porque

comprendería el cuarenta por ciento de todos los ingresos que obtuviera en determinado período, aun cuando derivaran de conceptos que no tuvieran relación con las obras autorales.

- De manera que la peticionaria de amparo no refuta que la acción de reparación del daño no se trata de una sanción, sino de un reembolso de las cantidades que se dejaron de percibir o que mermaron el patrimonio del actor. Aunado a que tampoco combate que el dispositivo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, expresamente señala que el cuarenta por ciento se aplicará sobre el precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier servicio y no sobre los ingresos del demandado, además, de que la intención del legislador fue aplicar ese porcentaje al ingreso que el titular del derecho debió recibir en caso de no haberse violado la ley.
- Así, estimó que las consideraciones del tribunal de alzada debían conservar su firmeza para orientar el sentido del fallo reclamado.
- Posteriormente, señala que no pasa inadvertido el hecho de que la quejosa señaló que, contrariamente a lo establecido por el Tribunal Unitario, el costo del hospedaje y otros ingresos son ajenos al daño al derecho patrimonial, pues indefectiblemente el artículo 216 aludido remite a esos elementos a manera de daño punitivos; pues no combate que la norma no prevé la aplicación del cuarenta por ciento sobre la totalidad de los ingresos del trasgresor, sino que ese porcentaje se aplicará al precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier servicio, en este caso, la licencia original.
- El Tribunal Colegiado del conocimiento declaró ***inoperantes por insuficientes*** los conceptos de violación, ya que la peticionaria del amparo no combatió frontalmente todas las consideraciones en que se apoyó la sentencia dictada por el tribunal de alzada.
- Sin embargo, nada dijo para contradecir que el procedimiento propuesto por la accionante, contemplaría elementos ajenos al daño del derecho patrimonial, es decir, factores diferentes a la indebida puesta a disposición de las obras audiovisuales, como el costo del hospedaje, así como otros beneficios y ventajas contempladas en esos servicios, como alimentos, botellas de agua, vinos, ubicación de la habitación, estacionamiento, luz, agua, etcétera, así como otras obras audiovisuales y musicales distintas de las que ostenta la actora que también pudieron ser reproducidas en los televisores de las habitaciones y cuyo precio sería indebido englobar para cuantificar la reparación del daño.

- Aunado, estimó correcta la decisión del Tribunal Unitario responsable. Ello, en virtud de que de la lectura de dicho numeral se advierte que la indemnización se puede materializar de dos formas: 1) respecto del precio de venta al público del producto original o; 2) respecto de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.
- Así, conforme a la interpretación gramatical de este precepto, la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere la Ley Federal del Derecho de Autor en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la ley; sin que deba comprender -como lo pretende la quejosa- el monto total de lo que obtuvo el hotel demandado por los servicios que prestó, ya que el legislador no lo estableció en esos términos, es decir, no habla de montos totales, sino de precio de venta al público del producto original o respecto a los servicios prestados.
- Lo anterior porque así se advierte de la parte conducente del texto referente a las etapas del proceso legislativo respectivo de la adición del artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor efectuada mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de dos mil tres; por lo que la idea del legislador al adicionar el aludido numeral fue garantizar que la indemnización, corresponda a la magnitud del daño ocasionado, cuando haya violaciones a los derechos que tutela la Ley Federal del Derecho de Autor.
- De suerte tal que, si bien era cierto que la peticionaria de amparo no reclamó la indemnización por venta de obras audiovisuales, sino porque la demandada puso a disposición de los huéspedes obras audiovisuales protegidas por el derecho de autor, sin contar con la licencia correspondiente para ello; sin embargo, aun en ese caso, no se puede fijar la indemnización sobre los ingresos totales que obtuvo la demandada en la prestación del servicio de hospedaje, pues -como lo estimó la autoridad responsable- la indemnización no tiene el carácter de una sanción y la ley no establece que la reparación del daño deba cuantificarse sobre los ingresos totales del infractor, sino respecto de la cantidad que el titular del derecho debió recibir en caso de no haberse violentado la ley.
- Además, de que la infracción de la que se duele la quejosa es por haber puesto a disposición de los huéspedes obras audiovisuales protegidas por derechos de autor sin contar con la licencia correspondiente, infracción que se llevó a cabo únicamente por haber proporcionado una televisión en donde se podían reproducir

dichas obras, es decir, la infracción no se cometió a través de todos los servicios que presta el hotel sino sólo por uno de ellos, por lo que como lo estimó la autoridad responsable no puede considerarse que la sanción deba calcularse por los ingresos totales del infractor.

- Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CXIII/2009, estableció que el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, no constituye una pena inusitada, ni una multa excesiva y por tanto no vulnera el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no es una pena ni una sanción por la comisión de algún ilícito penal o una falta administrativa, ni tiene el ánimo de causar al gobernado dolor en su cuerpo, deshonrarlo, causarle una alteración física o privarlo de una parte de su patrimonio a favor del Estado, sino sólo tiene propósitos indemnizatorios.
- En consecuencia, si la indemnización es un reembolso y no una sanción, simplemente no puede incluir el total de los servicios que presta el hotel, sino únicamente el precio de venta al público del producto original; es decir, de la licencia que debió haber obtenido y pagado antes de retransmitir las obras audiovisuales a los huéspedes del hotel.
- Además, atento a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento adecuado. De manera que el derecho moderno de daños mira a la naturaleza y extensión del daño a las víctimas y no a los victimarios.
- Por consiguiente, si la infracción no se cometió a través de todos los servicios que presta el hotel sino sólo por uno de ellos, no puede considerarse que la sanción deba calcularse por los ingresos totales del infractor.

14. **QUINTO. Agravios del recurso de revisión.** Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, hace valer como agravios, los expuestos a continuación:

Agravio Primero.

I.1. El Tribunal Colegiado omitió estudiar el primer concepto de violación relativo al alcance del derecho de la justa reparación.

Al respecto sostiene que su planteamiento deriva de que El Tribunal Unitario responsable decretó una indemnización irrisoria, lejos de ser reparadora, en virtud de que condenó al hotel al pago del cuarenta por ciento (40%) del precio de la licencia, mientras que los hoteles que sí cumplen con la Ley Federal del Derecho de Autor pagan el cien por ciento (100%) del precio de aquella, razón por la cual, ese criterio premia al violador de derechos humanos, haciéndoles un descuento del sesenta por ciento (60%) del precio real de la licencia.

Por tanto, alega que ese criterio de cuantificación no repara el daño sufrido a la víctima, ni ayuda a construir una cultura de la legalidad y respeto al marco jurídico, por el contrario, genera un efecto pernicioso al incitar a los hoteles a pasar por alto la contratación de licencias, pues les saldrá más barato violar los derechos de autor (40% del valor de la licencia), que cumplirlos en su integridad.

I.2.- Contrariamente a lo expuesto por la sentencia recurrida, sí se impugnaron las consideraciones del tribunal responsable.

De la lectura del escrito de demanda se advierte que todas las consideraciones expresadas por la responsable, fueron combatidas.

Por una parte, impugnó la determinación de que el monto no debe incluir beneficios ni ventajas como el costo del hospedaje, alimentos, etcétera, pues el amparo claramente se hizo valer que, conforme al precepto impugnado, el cuarenta por ciento (40%) debe cuantificarse sobre el precio de los “servicios” que presta el hotel, explicando las razones interpretativas que llevan a esa conclusión, aunado a que en la demanda de amparo la quejosa señaló por qué el unitario responsable se equivocó al decir que la totalidad de ingresos contiene elementos ajenos al daño del derecho patrimonial.

Por otro lado, también combatió la determinación de que el resultado de la cuantificación podría resultar desproporcional pues los ingresos derivan de conceptos que no están relacionados con las obras autorales, manifestando precisamente que una indemnización blanda es todo, menos proporcional.

Aunado a que de igual manera atacó la afirmación de que la reparación del daño no es una sanción, pues varias veces hizo relación con los daños punitivos, por lo que la reparación además de resarcir, también busca sancionar a los infractores.

También impugnó la determinación de que el artículo 216 impugnado, señala expresamente que el cuarenta por ciento (40%) debe aplicarse

sobre el precio de venta del producto original y no sobre ingresos, pues el juicio de amparo se enfocó en su mayoría a impugnar esa interpretación equivocada, para demostrar que el verdadero sentido del texto legal, lleva a la conclusión de que ese porcentaje debe hacerse con base en los ingresos, tan es así que se citó la resolución emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país en el amparo directo en revisión *****.

Por tal motivo, considera que el Tribunal Colegiado no tenía razón para omitir el estudio de la vulneración al derecho humano a la justa reparación, por lo que es ahora a través de la revisión que debe repararse esa omisión.

Agravio segundo.

II.1. Incorrecta interpretación que hace el Tribunal Colegiado del derecho humano a la justa indemnización.

Alega que el Tribunal Colegiado interpretó de forma desafortunada la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para otorgarle una función estrictamente compensatoria o resarcitoria a la indemnización, sin tomar en cuenta otras dimensiones, como la conducta infractora del demandado, razón por la cual la condena debe ser sobre los ingresos obtenidos del victimario.

II.2. La justa reparación no es solo una estricta compensación o reembolso.

Manifiesta que, contrariamente a lo expresado por el colegiado, sí debe tomarse en cuenta. para cuantificar el monto de la indemnización, la conducta infractora derivada del hecho lesivo, por lo que los ingresos que obtuvo el hotel, derivados de la violación a derechos de autor, deben ser considerados como parámetros para su cálculo, pues el hotel se beneficia económicamente de contar con entretenimiento audiovisual en sus habitaciones de hotel y zonas comunes, lo cual le otorga un lucro indirecto que no se produciría si no usara ilícitamente obras protegidas por derechos de autor.

Señala que hay lucro indirecto cuando una persona no tiene como actividad central o fundamental la explotación o uso de una obra, sin embargo, ese uso representa una ventaja o un atractivo adicional para su negocio, normalmente integrado en un conjunto de servicios que incluyen el acceso a las obras.

De manera que aun cuando el objeto principal de los hoteles sea la renta de habitaciones, les representa una ventaja o atractivo adicional que esas habitaciones tengan acceso a obras audiovisuales para el

beneficio de los huéspedes, tan es así que los hoteles que tienen televisión gozan de una ventaja frente a los hoteles que no la tienen y eso repercute en sus ingresos. Además, si un hotel cuenta con televisión ello influye en la clasificación o “ranking” para determinar el número de estrellas con el que cuenta, lo que repercute en el precio de la habitación, como se demuestra del artículo tercero del *“Acuerdo por el que se emiten lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera”*, emitido por la Secretaría de Turismo.

Luego de abundar sobre lo que la doctrina establece por lucro indirecto, la recurrente sostiene que es indudable que, a partir de contar con esa ventaja, las ganancias de los hoteles aumentan pero gracias a la violación de derechos de autor, por lo que esos mismos ingresos deben tomarse en cuenta para la cuantificación del monto indemnizatorio.

II. 3. El monto indemnizatorio debe atender a las circunstancias del caso concreto.

Expresa que el considerar a la justa reparación con un simple “reembolso” es un despropósito, pues la conducta infractora es uno de los elementos claves que debe ser tomado en cuenta para cuantificar el daño, lo que en especial impacta en los ingresos obtenidos con ayuda de la violación a los derechos de autor.

Así, sostiene que inversamente a lo expuesto por el colegiado, la cuantificación del daño debe tomar en cuenta la conducta infractora y las circunstancias concretas incluyendo la situación económica del victimario como bien lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **“REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIAL PENAL. PARÁMETROS PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)”**.

En caso contrario, y bajo el criterio de la autoridad responsable, convalidada por el Tribunal Colegiado, se incitaría al público en general para violar los derechos de autor. A manera de ejemplo, señala que si el precio de una licencia de hotel es de \$***** (100% del precio de la licencia) y muchos de los hoteles del sector cumplen con esa exigencia, se obligaría a los infractores que no tengan licencia a pagar solamente \$***** (40% del precio de la licencia), y eso sólo después de haber sido condenados judicialmente.

Por tanto, ese modelo de cuantificación no puede considerarse como una “justa indemnización”, si se está condonando al menos el sesenta por ciento (60%) del precio que originalmente se cobra a los hoteles que si cumplen con sus obligaciones.

Agravio tercero.

III.1. Incorrecta interpretación del colegiado sobre el derecho

humano a la justa reparación en cuanto a las consecuencias de empobrecimiento de la víctima.

La determinación del tribunal responsable, posteriormente convalidada por el colegiado, es insostenible, porque lejos de atender a los criterios de la Suprema Corte, empobrece a la actora.

III. 2. La sentencia recurrida genera empobrecimiento de la víctima, lo que es desproporcional.

Manifiesta que si el hotel hubiera respetado los derechos de autor hubiera celebrado el contrato respectivo y pagar el cien por ciento (100%) de la licencia anual, no obstante, a pesar de los acercamientos y pláticas ante el INDAUTOR, decidió mantenerse en el lado de la ilegalidad y violar, con pleno conocimiento los derechos de la actora, puesto que pensó que bastaba con pagar el servicio de cable.

Es por eso que, después de años de litigio, el monto indemnizatorio no consiste en reparar siquiera el lucro cesante, que hubiera sido el cien por ciento (100%) de la licencia anual del año dos mil diecisiete, ni tampoco el cien por ciento (100%) de la parte proporcional del mes de febrero de la referida anualidad; sino que absurdamente se condena al pago del cuarenta por ciento (40%) del precio de la licencia únicamente por el mes de febrero de dos mil diecisiete.

Sigue insistiendo en que con el criterio del colegiado se otorga un generoso descuento al infractor, pues no le permiten a la actora cobrar el cien por ciento (100%) de los perjuicios y menos aún, alcanzar una reparación integral del daño, lo cual sólo puede alcanzarse tomando en cuenta para el establecimiento de la condena los ingresos de la demandada.

15. **SEXTO. Procedencia del recurso.** Examinada la controversia propuesta en esta instancia, esta Sala estima **procedente** el recurso de revisión.
16. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigentes y aplicables al caso, se colige que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo es necesario que se cumplan, necesaria y conjuntamente, los requisitos siguientes:

- a) Que el Tribunal Colegiado en la sentencia de amparo, haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma de carácter general; haya hecho la interpretación directa de un precepto de la constitución; o bien, que hubiere omitido el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
- b) Que el problema de constitucionalidad señalado en el inciso anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

17. De manera que conforme al vigente marco constitucional y legal del recurso de revisión en amparo directo, para su procedencia es menester que en dicho medio de impugnación subsista controversia sobre la regularidad constitucional de una norma de carácter general, o bien, sobre la interpretación directa de normas del ordenamiento supremo; ya sea porque el Tribunal Colegiado se hubiere pronunciado al respecto en su sentencia o porque hubiere incurrido en omisión de su estudio cuando le hayan sido planteadas; y que bajo el criterio discrecional de este Alto Tribunal, el asunto pueda considerarse como de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo cual, a juicio de esta Primera Sala, entre otros supuestos, se actualizará en la medida en que la resolución del recurso permita generar un criterio que se estime novedoso, útil o relevante para el orden jurídico nacional.
18. En el caso, **se estima que sí se satisfacen** los presupuestos de procedencia referidos, por lo siguiente.
19. Como se puede observar de los antecedentes narrados, en el juicio de

origen, Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, instó acción contra una persona moral propietaria de un establecimiento mercantil en el ramo hotelero, con propósito de obtener la declaración judicial de que dicha demandada, al tener instalados televisores en las habitaciones del hotel: (I) realiza la exhibición y/o comunicación pública de obras audiovisuales protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor; (II) el reconocimiento de que la demandada requiere de una autorización expresa para exhibir y/o comunicar públicamente obras audiovisuales en su establecimiento comercial (hotel), por lo que se requiere que se reconozca judicialmente que la demandada debe abstenerse de retransmitir y poner a disposición de sus huéspedes las obras distribuidas por la actora sin previa licencia; y, en consecuencia de lo anterior (III) el pago por concepto de reparación del daño por el uso no autorizado de las obras audiovisuales que debían cuantificarse a razón del cuarenta por ciento (40%) de la facturación total que la demandada hubiera recibido durante el mes de febrero de dos mil diecisiete, en términos de lo dispuesto por el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

20. En el juicio ordinario civil, la sentencia de primer grado desestimó la acción por considerar, fundamentalmente, que Licencias y Servicios Audiovisuales, Sociedad Anónima de Capital Variable, carecía de legitimación en la causa para demandar de Hotelera de la Parra, Sociedad Anónima de Capital Variable, las prestaciones que reclamó.
21. Lo anterior en virtud de que la licencia otorgada a la actora para explotar las obras y fijaciones audiovisuales materia del contrato basal, no implicó la transmisión de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre éstas, sino sólo una autorización para su uso, bajo determinadas

y específicas modalidades; lo que se corrobora con el hecho de que en la cláusula primera del propio contrato, donde se excluyeron los derechos concernientes a cualquier otra modalidad de explotación, lo cual implica, que la licenciante (*****), se reservó el derecho de otorgar diversas licencias exclusivas o no exclusivas para la explotación de las obras y fijaciones audiovisuales materia del contrato, únicamente en las modalidades de explotación que no hubieren sido pactadas en éste.

22. De manera que, si la actora no acreditó ser la titular de los derechos patrimoniales sobre las obras materia del contrato de licencia base de la acción, carece de legitimación activa en la causa para demandar a su contraria las prestaciones que precisa en su escrito inicial; motivo por el cual debía absolverse a la demandada de todas las prestaciones que se le reclamaron.
23. Sin embargo, esa determinación fue revocada por el Tribunal Unitario responsable, quien al resolver el recurso de apelación estimó, en esencia, que contrario a lo estimado por el juzgador, la legitimación de la actora surge en razón del contrato de licencia de derechos de autor y distribución cinematográfica y audiovisual, de tres de enero de dos mil catorce, celebrado entre ***** y Licencias y Servicios Audiovisuales, inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor, con el registro *****.
24. En virtud de lo anterior, y al haber resultado fundados los agravios de la apelante, en el sentido de que la actora sí estaba legitimada para deducir sus derechos respecto de las pretensiones reclamadas, por lo que reasumió jurisdicción y se pronunció al respecto.
25. En lo que interesa, dicho Tribunal Unitario estimó lo siguiente:

- La demandada realizó una *comunicación pública* al poner a disposición de sus huéspedes, las obras audiovisuales cuya licencia ostenta la actora, lo anterior con independencia de que haya celebrado un contrato de prestación de servicios “Plan Hotelero” con una empresa de televisión de paga.
- El hecho que las habitaciones del hotel sean un ámbito doméstico, íntimo o privado no implica que la actividad desplegada por el hotel al retransmitir (como intermediario) las obras originalmente transmitidas a través de un sistema de televisión por cable, deje de ser una comunicación pública ni que el derecho humano a la privacidad constituya límite ni excepción al derecho de autor.
- Resulta infundada la excepción de debida integración de la litis opuesta por la demandada y basada en el hecho de que la actora no llamó a juicio a la empresa *********, quien a través de *********, celebró con la enjuiciada un contrato de prestación de servicios, arrendamiento y comodato para brindarle el servicio de televisión de paga. Ello, porque con independencia de que el juez haya mandado llamar a juicio a la tercera ********* (once de noviembre de dos mil diecinueve), lo cierto es que la demandada pretende deslindarse de la obligación que tiene de acreditar que cuenta con la licencia respectiva para poner a disposición de los huéspedes las obras audiovisuales materia del contrato basal, bajo el argumento de que tiene contratado un servicio de televisión de paga; sin embargo, de acuerdo con lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la retransmisión de ese tipo de material en las televisiones instaladas en las recámaras, a través de un sistema de cable controlado por el propio establecimiento, constituye un nuevo acto de comunicación pública que requiere licencia propia, con independencia de que se tenga contratado un servicio de televisión de paga.
- En relación con la omisión del demandado de adquirir la autorización para el uso de obras audiovisuales, concluyó que si aquella realizó la comunicación pública de las obras audiovisuales cuya titularidad ostenta la actora, sin tener alguna autorización para ello, entonces trasgredió el derecho patrimonial cuya titularidad pertenece a la accionante, con lo que se acredita el hecho ilícito.
- En cuanto al nexo causal, consideró que la actora demostró en el juicio que la demandada violó sus derechos de autor patrimoniales al poner a disposición de sus huéspedes las obras audiovisuales protegidas con fines lucrativos y sin la autorización correspondiente (hecho ilícito), entonces, debe tenerse por acreditado el daño y el nexo causal entre éste y aquél, puesto que el enjuiciado le privó de una ganancia a la actora (costo de la licencia) que la ley le permite obtener. El daño ocasionado a la actora consistió en que dejó de recibir la cantidad **equivalente al costo de la licencia que la demandada debió adquirir para hacer uso autorizado por un mes**, en las habitaciones de su hotel, de las obras cuya titularidad de derechos patrimoniales detenta la accionante.

- De tal suerte que de la interpretación del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, se desprendía que el procedimiento de cuantificación de la cantidad mínima por concepto de reparación del daño material, correspondía a que se aplique el cuarenta por ciento al precio de venta al público del producto original y después multiplicarlo por el número de veces en que se utilizó de forma ilegal el referido producto, que en otras palabras consistirá en obtener el cuarenta por ciento (40%) del ingreso que el titular del derecho debió recibir en caso de no haberse violentado la ley.
- Por lo que resultaba incorrecta la forma que propone la actora para obtener la cantidad mínima por reparación del daño, consistente en la aplicación del cuarenta por ciento sobre los ingresos totales del demandado por concepto del servicio de hospedaje que comprendió la puesta a disposición de las obras audiovisuales cuya licencia ostenta, pues la norma nunca prevé la aplicación del cuarenta por ciento a los ingresos del trasgresor de la norma, sino que se debe aplicar al precio de venta al público del producto original, en este caso, la licencia de uso respectiva.
- Aunado a que ese procedimiento propuesto, contemplaría elementos ajenos al daño del derecho patrimonial, es decir, factores diferentes a la indebida puesta a disposición de las obras audiovisuales, como lo sería el propio costo del hospedaje, así como otros beneficios y ventajas contempladas en ese servicio, por ejemplo, alimentos, botellas de agua, vino, ubicación de la habitación, estacionamiento, luz, agua, etcétera, así como otras obras audiovisuales y musicales distintas de las que ostenta la actora, que también pudieron ser reproducidas en los televisores de las habitaciones, cuyo precio sería incorrecto englobar para cuantificar la reparación del daño.
- Además de que podría resultar en una cantidad desproporcionada, dado que comprendería el cuarenta por ciento de todos los ingresos que obtuviera en determinado periodo, aun cuando derivaran de conceptos que no tuvieran relación con las obras autorales; lo que generaría una afectación ruinosa y excesiva al enjuiciado.

26. Respecto a tales cuestiones, en los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, se advierte que la quejosa argumentó, fundamentalmente, que la interpretación efectuada por el tribunal responsable transgredía el derecho a una justa reparación. Ello, en virtud de que la fórmula aplicada por dicha autoridad otorgaría un monto de condena tan mínimo que constituye un incentivo para violar los derechos de autor.
27. Agregó que el tribunal responsable realizó una incorrecta interpretación del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, puesto que

no debía tomarse para el monto indemnizatorio el porcentaje que establece dicho precepto (40 %) sobre el precio de venta al público del producto original que se transmitió ilegalmente sino a partir de los “servicios” que implicaron la violación a los derechos de autor de la demandante; puesto que la violación del hotel no ocurre porque éste venda a los ocupantes los “productos”, sino a partir de que presta el “servicio” de hospedaje ya que esa actividad fue la que vulneró los derechos de autor de la demandante.

28. Por ende, alegó que si un hotel es responsable y cumple con los lineamientos de la Ley Federal del Derecho de Autor está obligado a pagar a la actora el cien por ciento (100%) del precio de la licencia, pero si otro incumple con sus obligaciones y viola derechos de autor, sólo tiene que pagar el cuarenta por ciento (40%) del precio de la licencia, es decir, se está premiando al hotel que viola la ley al otorgarle un descuento del 60% del importe original.
29. Finalmente, precisó que la autoridad responsable realizó una incorrecta interpretación gramatical para saber cómo debía calcularse la indemnización. Lo anterior, en virtud de que los elementos para cuantificar la reparación consistían en el porcentaje (40%) y el precio aplicado a la prestación de ciertos servicios (hospedaje); de manera que la cantidad a la que se debió condenar a la enjuiciada debió ser el cuarenta por ciento (40%) del precio obtenido por prestar los servicios de hospedaje que fueron los que implicaron violación a derechos de autor, esto es, sobre todos los ingresos que obtuvo el hotel durante el período determinado.
30. Ahora bien, como se ha visto, el Tribunal Colegiado otorgó respuesta con base en dos premisas fundamentales.

1) Por una parte, estimó que los argumentos expresados por la quejosa resultaban inoperantes por insuficientes al no combatir frontalmente todas las consideraciones en que se apoyó la sentencia de apelación, consistentes en que el procedimiento propuesto por la accionante, contemplaría elementos ajenos al daño del derecho patrimonial; podría resultar en una cantidad desproporcional para la demandada; o, que la acción de reparación del daño no se trata de una sanción, sino de un reembolso de las cantidades que se dejaron de percibir o que mermaron el patrimonio del actor.

2) Con independencia de la inoperancia señalada, estimó correcta la decisión del Tribunal Unitario responsable. Ello, en virtud de que de la interpretación del artículo 216 Bis de la ley de la materia se advierte que no se puede fijar la indemnización sobre los ingresos totales que obtuvo la demandada en la prestación del servicio de hospedaje, pues -como lo estimó la autoridad responsable- la indemnización no tiene el carácter de una sanción y la ley no establece que la reparación del daño deba cuantificarse sobre los ingresos totales del infractor, sino respecto de la cantidad que el titular del derecho debió recibir en caso de no haberse violentado la ley, sobre todo si se toma en cuenta que la infracción no se cometió a través de todos los servicios que presta el hotel sino sólo por uno de ellos.

31. A partir de la litis constitucional precisada, a juicio de esta Primera Sala, se colige que la parte actora sí sometió a consideración del Tribunal Colegiado, la necesidad de que se revisara la interpretación efectuada por el tribunal responsable respecto al derecho de la justa reparación en materia de derechos de autor, en relación con la cuantificación decretada con base en lo dispuesto por el artículo 216 Bis de la Ley

Federal del Derecho de Autor; lo que implicaba realizar una interpretación directa de normas y principios constitucionales respecto de la protección de los derechos de autor específicamente en materia indemnizatoria; y en ese sentido, debe admitirse que el Tribunal Colegiado fue omiso en atender a la litis constitucional planteada conforme a su causa de pedir.

32. Lo anterior en virtud de que el Tribunal Colegiado redujo su análisis a una mera declaración de inoperancia bajo la afirmación de que no se combatieron la totalidad de los argumentos expuestos por el tribunal de alzada en la sentencia de apelación, circunstancia que es combatida vía agravios por la ahora recurrente. De modo que **subsiste la cuestión constitucional** sometida a la decisión de la autoridad de amparo, por omisión de estudio del Tribunal Colegiado, en lo atinente a la interpretación del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.
33. Por otra parte, en criterio de esta Sala, el asunto **reviste un interés excepcional** para ser admitido, pues si bien la recurrente hace notar e invoca en su favor el criterio que ha sostenido esta Primera Sala en el amparo directo en revisión *********, en cuanto se refiere, en lo conducente, a aspectos de la problemática presentadas en el caso; también es cierto que dicho precedente no es vinculante, por lo que este asunto es apto para generar un criterio obligatorio para los órganos jurisdiccionales, en los temas materia de interpretación constitucional subsistentes en la controversia, que será de utilidad para el orden jurídico nacional².

² Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXXXIX/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 745, de rubro y texto siguientes: **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO SE ADUCE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO NO ATENDIÓ LOS**

34. **SÉPTIMO. Estudio de fondo.** Los agravios del recurrente resultan esencialmente **fundados**, y conducen a revocar la sentencia del Tribunal Colegiado.

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN TORNO A LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOLUCRADOS EN UN CASO EN CONCRETO. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si en un recurso de revisión en amparo directo, se plantean agravios relativos a la omisión de un tribunal colegiado de tomar en cuenta los parámetros fijados por este alto tribunal para que dicho órgano jurisdiccional realice una interpretación constitucional de ciertos derechos fundamentales, ello acarrea un aspecto propiamente constitucional. En efecto, las interpretaciones constitucionales que realiza esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen fuerza vinculante y por tanto deben acatarse, por lo que cuando en una sentencia se fija el sentido y alcance de un derecho fundamental y se ordena que a la luz de dicha determinación se realice un nuevo estudio de la demanda de amparo directo presentada por el quejoso, surge como consecuencia necesaria y directa, la obligación de que el tribunal colegiado fundamente y motive su nueva resolución a partir de los lineamientos señalados por este alto tribunal. En consecuencia, cuando en un recurso de revisión se aduce que el tribunal colegiado no atendió los principios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la interpretación de los derechos fundamentales involucrados en el caso en concreto, el mismo debe declararse procedente, en tanto subsiste un problema de constitucionalidad, pues de lo contrario, el cumplimiento de las sentencias de este alto tribunal estaría condicionado a lo resuelto por un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior, dejando al recurrente en un estado de indefensión”. Asimismo, resulta aplicable en lo conducente la tesis aislada 2a. LI/2020 (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, enero de 2021, Tomo I, página 667, que dispone textualmente: **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA RESUELVE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, CONTRAVINIENDO LOS PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.** **Hechos:** En un amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el problema de constitucionalidad planteado, relativo al alcance de la protección laboral concedida a la mujer prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución General, en contravención al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la mujer que es despedida por razón de su embarazo, tiene derecho a la reinstalación laboral con independencia de la naturaleza del trabajo. Contra ese fallo se interpuso recurso de revisión, mismo que fue desechado por auto de presidencia. Tal determinación fue impugnada a través del recurso de reclamación ante la Segunda Sala del Alto Tribunal. **Criterio jurídico:** La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la revisión en amparo directo procede excepcionalmente cuando la sentencia recurrida contradice aquellos precedentes de esta Suprema Corte en los que ha precisado el contenido y alcance de las normas o los principios constitucionales. **Justificación:** Lo anterior, pues si bien existen criterios aislados de esta Suprema Corte que, en estricto sentido, no obligan a los tribunales inferiores, lo cierto es que si éstos deciden inobservar el precedente de la Corte y, precisamente, ello es motivo de impugnación a través de la revisión en amparo directo, este Alto Tribunal cuenta con amplias facultades para conocer del asunto, a fin de reiterar el recto entendimiento que debe darse a la Constitución General, evitar interpretaciones divergentes sobre el mismo problema constitucional y posibilitar que los justiciables puedan ver realizadas sus expectativas de ser juzgados en forma consistente con los precedentes sentados por este Tribunal Constitucional. De ahí que en tales asuntos se reúnen los requisitos de importancia y trascendencia, pues la recta aplicación de las decisiones emitidas por la Corte Constitucional promueve la estabilidad, representa un elemento de continuidad en la ley – tanto reglas como principios– y tiene sus raíces en la necesidad de satisfacer expectativas razonables a los justiciables.

35. Como se indicó previamente, en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado otorgó respuesta a los argumentos expuestos por la quejosa en el sentido de declararlos inoperantes por insuficientes, en virtud de que no combatió frontalmente todas las consideraciones en que se apoyó la sentencia de segundo grado, consistentes en que el procedimiento propuesto por la accionante, contemplaría elementos ajenos al daño del derecho patrimonial; además de que podría derivar en una cantidad desproporcional para la demandada; o, que la acción de reparación del daño no se trata de una sanción, sino de un reembolso de las cantidades que se dejaron de percibir o que mermaron el patrimonio del actor.
36. Esa determinación es combatida por la ahora recurrente en sus agravios al sostener, fundamentalmente, que sí confrontó cada uno de las consideraciones expresadas por la responsable, entre otras cosas: I) aquellas donde se refirió a los beneficios o ventajas ajenas a la violación de derechos de autor como el costo del hospedaje y alimentos, pues la condena debe cuantificarse con base en los “servicios” que presta el hotel y no el precio de venta de los “productos” originales que se comercializaron; II) las relacionadas con la desproporcionalidad de la condena respecto de todos los ingresos de la demandada, alegando que en su demanda de amparo hizo alusión a los daños punitivos por lo que se busca sancionar a los infractores; y, III) la atinente a que la justa reparación no solo constituye una compensación o reembolso, puesto que debe otorgarse una condena derivada del lucro indirecto producido por la utilización ilícita de los derechos de autor.
37. A partir de lo anterior, es claro que, contrariamente a lo expresado por el Tribunal Colegiado, la quejosa sí exteriorizó argumentos a partir de los cuales acreditó causa de pedir suficiente en relación con la

cuantificación decretada con base en lo dispuesto por el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor; lo que implicaba que el Tribunal Colegiado debía efectuar el pronunciamiento correspondiente y no concretarse a declarar inoperantes sus conceptos de violación.

38. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que a mayor abundamiento el colegiado concluyera que era correcta la interpretación efectuada por el unitario responsable respecto de la cuantificación de la indemnización en tanto que, de cualquier manera, a juicio de esta Primera Sala, aquella no resulta ajustada a derecho, como se verá a continuación.
39. Por ende, ante la omisión del Tribunal Colegiado, esta Primera Sala se pronunciará sobre la correcta interpretación del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor en relación con la reparación del daño, así como la indemnización por daños y perjuicios y violación a los derechos de autor.
40. Como punto de partida, conviene destacar que aun cuando en el presente caso no será materia de análisis en el presente recurso de revisión el tema de la protección de los derechos patrimoniales de los autores o lo relativo a si existió o no un acto de comunicación pública, en tanto que tales extremos no fueron combatidos vía agravios, lo cierto es que previamente al estudio sobre la interpretación de la indemnización por violación a derechos de autor contenido en el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor que impugna la inconforme, es necesario hacer un breve bosquejo sobre los temas aludidos.
41. Como punto de partida, el derecho de autor se encuentra reconocido a nivel constitucional en el artículo 28 de la Constitución Política del país; a nivel internacional se reconoce en el artículo 27.2 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, y de forma particular en la Ley Federal del Derecho de Autor³.

42. Esta Primera Sala ha sostenido que los derechos de autor protegen una materia *intangible*, siendo ésta la idea creativa o artística, y cuya naturaleza es la de derechos morales; y, por otro lado, de carácter patrimonial derivado de su materialización y, en su caso, de su realización y/o reproducción objetiva, correspondiendo a obras literarias, musicales, pictóricas, cinematográficas, esculturales, arquitectónicas o cualquiera otra que por su esencia sea considerada artística.
43. De tal suerte, que corresponde al autor una dualidad de derechos en relación con su carácter subjetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la que se plasma su idea creativa de manera intangible. Contando así, por un lado, con **derechos patrimoniales**, a través de

³ **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:**

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

[...]

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 27.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Ley Federal del Derecho de Autor.

Artículo 1o. La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

los cuales puede obtener beneficios de naturaleza económica, como la concesión de derechos por su reproducción, a obtener regalías o por su venta como un bien material. Asimismo, **derechos de naturaleza moral**, tales como integridad y titularidad de la obra, de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como artista, derivados de la integridad de la obra⁴.

44. En cuanto a la vertiente patrimonial, esta Sala ha establecido que el derecho a la propiedad (en general) constituye un derecho humano de rango constitucional, reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política del país y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
45. Por su parte, el derecho a la *propiedad intelectual* ha sido reconocido como una manifestación del derecho de propiedad, incluida específicamente en los artículos 28, décimo párrafo, de la Constitución federal y 15, numeral 1, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y debe entenderse como el *derecho de las personas a ser propietarias de derechos de autor* y aquellos de naturaleza industrial, en los términos de las legislaciones respectivas.

⁴ Lo anterior fue sustentado en la tesis Tesis 1a. CCVIII/2012, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, septiembre de dos mil doce, página 504, cuyo rubro y texto establecen: “**DERECHOS DE AUTOR. PROTEGEN TANTO DERECHOS PATRIMONIALES COMO MORALES.** Los derechos de autor protegen la materia intangible, siendo ésta la idea creativa o artística y cuya naturaleza es la de derechos morales; y por otro lado, de carácter patrimonial derivado de su materialización, y en su caso, de su realización y/o reproducción objetiva, correspondiendo a obras literarias, musicales, pictóricas, cinematográficas, esculturales, arquitectónicas o cualquiera que por su esencia sea considerada artística. De tal suerte, corresponde al autor una dualidad de derechos en relación a su carácter subjetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la que se plasma su idea creativa de manera tangible; contando así, por un lado, con derechos patrimoniales, a través de los cuales puede obtener beneficios de naturaleza económica, como la cesión de derechos por su reproducción; a obtener regalías o por su venta como un bien material; así como derechos de naturaleza moral, tales como la integridad y paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como artista, derivados de la integridad de la obra”.

46. Así, existe un derecho humano a la propiedad que contempla una faceta específica en la forma de propiedad intelectual, las distintas manifestaciones de ésta y su tratamiento, según se consideran parte de los derechos de autor o de los de propiedad industrial. Tienen una naturaleza patrimonial y se rigen con base en disposiciones cuyo contenido depende en gran medida de la libertad de configuración otorgada al Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución, debiendo además acatar los lineamientos derivados del derecho internacional en la materia⁵.

47. El Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que esta vertiente patrimonial de los derechos de autor puede clasificarse en dos subtipos:

⁵ Lo anterior se deriva de la tesis 1a. CLXXVIII/2018 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, diciembre de dos mil dieciocho, página 287, que literalmente señala: “**DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SU CONCEPTUALIZACIÓN COMO VERTIENTE DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y SUS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER PATRIMONIAL.** El derecho a la propiedad –es decir, a tener propiedades en abstracto, según lo definió esta Sala en el amparo directo en revisión 2525/2013– constituye un derecho humano de rango constitucional, reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el derecho a la propiedad intelectual ha sido reconocido como una manifestación del derecho de propiedad, incluida específicamente en los artículos 28, décimo párrafo, de la Constitución y 15, numeral 1, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y debe entenderse como el derecho de las personas a ser propietarias de derechos de autor y de aquellos de naturaleza industrial, en los términos de las legislaciones respectivas. No obstante, la titularidad de una obra o una marca deben entenderse como derechos patrimoniales cuyas afectaciones también deben valorarse en ese plano. Lo anterior debe leerse armónicamente con lo resuelto en el amparo directo 49/2013, en el que esta Primera Sala precisó que existen derechos fundamentales, como la propia imagen, de los cuales se puede llegar a obtener un beneficio patrimonial tutelado por la Ley de la Propiedad Industrial. No obstante, el carácter de la propia imagen como derecho humano deriva de su propia naturaleza y del reconocimiento que en esos términos realiza la propia Constitución y no de su tratamiento como una especie de derecho patrimonial. Todo lo anterior permite a esta Sala concluir que si bien existe un derecho humano a la propiedad que contempla una faceta específica en la forma de propiedad intelectual, las distintas manifestaciones de ésta y su tratamiento, según se consideren parte de los derechos de autor o de los de propiedad industrial, tienen naturaleza patrimonial y se rigen con base en disposiciones cuyo contenido depende en gran medida de la libertad de configuración otorgada al órgano legislativo federal con fundamento en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución, aun cuando éste deba acatar los lineamientos derivados del derecho internacional en la materia”.

1) derechos de explotación o patrimoniales (en estricto sentido) y, 2) otros derechos dentro de los que se encuentran los de simple remuneración (como el de regalías), previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor⁶, el cual constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y previsto por el Estado en favor del autor de la obra o su causahabiente. El derecho de autor está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica o transmite públicamente la obra por cualquier medio.

48. El derecho de autor es distinto de las regalías mencionadas en los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor⁷, que se refieren, por ejemplo, las contraprestaciones contractuales que el adquirente del derecho de explotación paga al autor como parte del importe de la transmisión de dicho derecho estipulado en el contrato respectivo⁸.
49. La Ley Federal del Derecho de Autor especifica que las formas mediante las cuales es posible hacer una obra del conocimiento público son: **a)** la divulgación; **b)** la publicación; **c)** la comunicación pública; **d)**

⁶ **Artículo 26 bis.** El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho del autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones V y VI de la Ley.

El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del Artículo 27 Fracciones II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en el Artículo 212 de esta Ley.”

⁷ **Artículo 8o.** Para los efectos de la Ley y de este Reglamento, se entiende por regalías la remuneración económica generada por el uso o explotación de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros o emisiones en cualquier forma o medio.

Artículo 9o. El pago de regalías al autor, a los titulares de derechos conexos, o a sus titulares derivados, se hará en forma independiente a cada uno de quienes tengan derecho, por separado y según la modalidad de explotación de que se trate, de manera directa, por conducto de apoderado o a través de las sociedades de gestión colectiva.

⁸ Véase la Jurisprudencia P./J. 102/2007, de rubro: “**DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. SU CONCEPTO.**”. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 6 y registro 170786.

la ejecución o representación pública; **e)** la distribución al público; y, **f)** la reproducción.

50. La **comunicación pública** como una forma que permite hacer del conocimiento público de una obra consiste en el *acto mediante el cual la obra se pone al alcance general, por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares*⁹.

51. En términos del artículo 27 de la Ley de la materia, la comunicación pública se puede realizar a través de: i) la representación, recitación y ejecución pública en el caso de obras literarias y artísticas; ii) la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas; y, iii) el acceso público por medio de la telecomunicación.
52. Sobre esta comunicación pública, el autor tiene derecho, conforme al artículo 26 bis de la Ley de la materia, a percibir una regalía. La cual debe ser pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública.
53. En el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor se precisa que el derecho de comunicación al público consiste en el *derecho exclusivo de los autores de obras literarias y artísticas de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos e inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el*

⁹ **Artículo 16.** La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación:

[...]

III. Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone al alcance general, por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares; (...).".

*momento que cada uno de ellos elija*¹⁰.

54. Ahora, el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor tiene como finalidad garantizar una indemnización a los autores por la violación a los derechos que les confiere la ley.
55. La citada indemnización por daño moral o material y daños y perjuicios, por violación a los derechos conferidos a favor de los autores, se sitúa en el campo de la responsabilidad civil y no tiene el propósito de castigar, sino más bien, de **resarcir**. Por tanto, el precepto en estudio establece una regulación abstracta y general sin determinar situaciones jurídicas referidas a una persona o a un grupo de personas, ya que comprende a todos los sujetos que se encuentren en el supuesto de violar los derechos autorales.
56. En ese sentido, la finalidad del artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor es privilegiar a los autores, posibilitando que los daños causados a sus derechos autorales sean resarcidos en concordancia con el beneficio obtenido por los infractores.
57. Ahora bien, atendiendo a la causa de pedir, la sociedad actora ahora recurrente Licencias y Servicios Audiovisuales plantea que la interpretación efectuada por el Tribunal Unitario responsable, posteriormente convalidada por el órgano colegiado, respecto del artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, es inconstitucional por ser contrario al principio de justa indemnización y reparación integral ante violación de derechos de autor, aunado a que es contraria a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
58. La recurrente propone que dicho precepto debe interpretarse en el

¹⁰ Artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

sentido de que el monto indemnizatorio de la condena a la enjuiciada debe hacerse con base en el porcentaje establecido en el artículo citado, esto es, el cuarenta por ciento (40%) pero de todos los servicios que implicaron la violación a derechos de autor durante el periodo en que ocurrió la transmisión pública, dado que la demandada presta el servicio de hospedaje y es a partir de esa actividad que vulneró los derechos de autor, por lo que debía condenarse a ese porcentaje sobre todos los ingresos del hotel enjuiciado.

59. Asiste razón a la inconforme.
60. En primer lugar, es conveniente traer a colación el contenido literal del precepto legal cuya interpretación se impugna:

“Artículo 216 bis. La reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta Ley en ningún caso será inferior al **cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios** que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta Ley.

El juez con audiencia de peritos fijará el importe de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior.

Para los efectos de este Artículo se entiende por daño moral el que ocasione la violación a cualquiera de los derechos contemplados en las Fracciones I, II, III, IV y VI del Artículo 21 de esta Ley.”

61. El Tribunal Colegiado interpretó la norma en el sentido de que el porcentaje debía fijarse únicamente sobre el precio al público de la venta del producto original, dado que la la indemnización no tiene el carácter de una sanción y la ley no establece que la reparación del daño

deba cuantificarse sobre los ingresos totales del infractor, sino respecto de la cantidad que el titular del derecho debió recibir en caso de no haberse violentado la ley, sobre todo si se toma en cuenta que la infracción no se cometió a través de todos los servicios que presta el hotel sino sólo por uno de ellos.

62. Dichas consideraciones son incorrectas. La norma impugnada establece claramente que, ante la violación a los derechos de autor, la indemnización respectiva en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicio. Agrega que, en caso de que no sea posible determinar el precio del producto o servicio original, se fijará con ayuda de peritos.
63. No hay duda pues, de que el cuarenta por ciento de indemnización se aplicará sobre el precio que se haya ofertado al público respecto del producto o servicio que se ofrece sin el pago de derechos. Si no es posible fijar el precio original, se acudirá a la opinión de peritos a fin de obtenerlo y aplicar el porcentaje señalado.
64. Por ejemplo, cuando una persona almacena música en algún formato digital (como puede ser un disco compacto) y la comercializa, la indemnización se fijará tomando en cuenta el precio en el que se vendió u ofertó al público dicho disco compacto que contiene música protegida por el derecho de autor. Si no es posible determinar el precio, se llamará a un perito.
65. Ahora, el problema surge cuando no estamos frente una violación del derecho de autor a través de la venta de un producto que se comercializó al público, **sino de un servicio en el que se utiliza o exponen obras audiovisuales protegidas por el derecho de autor,**

en las cuales pueden ofrecerse otros productos como tarifa de hospedaje, alimentos y bebidas, como parte del servicio, como es el caso de los hoteles.

66. Es en estos casos en donde se debe determinar qué incluye el *precio de la prestación original de cualquier tipo de servicios que implique violación* a los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.
67. Sobre ese aspecto, esta Primera Sala considera que **el precio de la prestación original debe incluir todos aquellos elementos que convergen en la violación a los derechos de autor.**
68. En primer lugar, se descarta la interpretación que se propone en la sentencia recurrida, en el sentido de que la indemnización debe aplicarse sobre el cuarenta por ciento (40%) de precio de la licencia durante el mes en que se originó la transmisión del material audiovisual que constituyó la puesta a disposición de la comunicación pública sin licencia.
69. Esa interpretación se aleja por completo de la intención resarcitoria que establece la Ley Federal del Derecho de Autor, pues condiciona el derecho de las y los autores de recibir una indemnización cuyo monto resultaría mínimo en comparación con la violación en que incurrió el infractor.
70. En efecto, dicho precepto legal señala que la reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere dicho ordenamiento en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de

servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la propia ley, lo cual tiene como finalidad garantizar a los titulares de derechos autorales que la reparación deberá ser resarcitoria y debe atender al daño causado.

71. Por tanto, si la reparación del daño causado se fija con base en un porcentaje inferior a la mitad de lo que originalmente cuesta la totalidad del monto de la licencia original (40%), es claro que no se estaría cumpliendo con la finalidad indemnizatoria que se busca pues, por una parte, el monto sería tan exiguo que no sería adecuado para resarcir el daño sufrido, pues dicho porcentaje deja un margen mayor a favor del infractor, aunado a que tampoco se estaría colmando el efecto disuasorio que se pretende aplicar a los transgresores, esto es, generar condenas ejemplares que sirvan de parámetro para evitar que las conductas de transmisión ilegal de contenido audiovisual sigan suscitándose.
72. De manera que, de adoptarse el criterio sostenido por el colegiado, se generaría un escenario que incentivaría la violación a la ley, pues en todos los casos en los que se cometa una infracción a los derechos de autor, el infractor solo deberá pagar el cuarenta por ciento del precio de la licencia original por el período en que cometió la transgresión.
73. Al respecto, esta Primera Sala considera que la norma en cuestión establece un sistema objetivo que prevé el cuarenta por ciento sobre el precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios, Esta medida se centra en el daño causado y, por tanto, la indemnización se debe fijar siempre tomando en cuenta el precio original del producto o el servicio ofertado al público, lo que posibilita a que aquellas actividades generadas por la empresa demandada, en este caso, un desarrollo hotelero, a partir de la utilización ilegal de obras audiovisuales, sí puedan ser incluidas dentro

de la condena con motivo de la justa reparación.

74. Dicho precepto legal fue incluido en la Ley Federal del Derecho de Autor mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de dos mil tres y entró en vigor el día siguiente de su publicación. La exposición de motivos correspondiente señaló lo siguiente:

“(...) Finalmente, en un acto de justicia, las Comisiones Unidas proponen adicionar el artículo 216 Bis, cuyo objetivo es el de garantizar que la indemnización, corresponda a la magnitud del daño ocasionado, cuando haya violaciones a los derechos que tutela la presente Ley.”

75. Así, el objetivo de la referida norma es garantizar que la indemnización a que tienen derecho los autores por la violación a los derechos que les confiere la ley, corresponda a la magnitud del daño ocasionado. En cuanto a este aspecto, el Reglamento de la ley prevé que no será condición para la calificación de una conducta o actividad el hecho de que se obtenga o no el lucro esperado¹¹.

76. En ese sentido, el porcentaje de la indemnización por violación a los derechos de autor, sin tomar en cuenta otros elementos que forman parte del precio de venta al público ofertado por el infractor o de los servicios que presta como parte de sus actividades comerciales, tiene

¹¹ **Artículo 11.** Se entiende realizada con fines de lucro directo, la actividad que tenga por objeto la obtención de un beneficio económico como consecuencia inmediata del uso o explotación de los derechos de autor, derechos conexos o reservas de derechos, la utilización de la imagen de una persona o la realización de cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de cómputo. Se reputará realizada con fines de lucro indirecto su utilización cuando resulte en una ventaja o atractivo adicional a la actividad preponderante desarrollada por el agente en el establecimiento industrial, comercial o de servicios de que se trate. **No será condición para la calificación de una conducta o actividad el hecho de que se obtenga o no el lucro esperado.**

como consecuencia que no se repare de manera integral el derecho violado al autor o autora de una obra.

77. Lo anterior, pues el prestador de un servicio obtiene ganancias porque ambienta el establecimiento con la transmisión de obras respecto de la cual no tenía el derecho de comunicar o ejecutar públicamente, generando un espacio de distracción para sus clientes y propiciando la venta de otros productos, máxime si se toma en consideración que la clasificación en el ramo hotelero depende en gran medida de las amenidades que ofrezca a los huéspedes, entre otras cosas, el servicio de entretenimiento audiovisual, por lo que no solo genera un incentivo para los consumidores el hecho de que cuente con ese beneficio, sino que también porque su reputación dentro de ese giro comercial se verá acrecentada, lo que impacta en las ganancias que puede obtener.
78. Como se adelantó, esta Primera Sala ya ha sostenido con anterioridad que los derechos de autor protegen una materia intangible, siendo ésta la idea creativa o artística, y cuya naturaleza es la de derechos morales; y, por otro lado, de carácter patrimonial derivado de su materialización y, en su caso, de su realización y/o reproducción objetiva, correspondiendo a obras literarias, musicales, pictóricas, cinematográficas, esculturales, arquitectónicas o cualquiera otra que por su esencia sea considerada artística.
79. En cuanto a la vertiente patrimonial de esta clase de derechos, ha establecido que el derecho a la propiedad constituye un derecho humano de rango constitucional, reconocido en los artículos 27 de la Constitución Federal y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
80. En su vertiente patrimonial, los derechos de autor pueden clasificarse en dos subtipos: 1) derechos de explotación o patrimoniales (en estricto

sentido) y, 2) otros derechos dentro de los que se encuentran los de simple remuneración (como el de *regalías*), previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y previsto por el Estado en favor del autor de la obra o su causahabiente, que está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica o transmite públicamente la obra por cualquier medio¹².

81. La Ley Federal del Derecho de Autor especifica que las formas mediante las cuales es posible hacer una obra del conocimiento público son: **a)** la divulgación; **b)** la publicación; **c)** la comunicación pública; **d)** la ejecución o representación pública; **e)** la distribución al público; y, **f)** la reproducción¹³.
82. La definición legal que se ofrece en la Ley de la materia sobre la **comunicación pública** es el *acto mediante el cual la obra se pone al alcance general, por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares*.

¹² **Artículo 26 bis.** El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho del autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones V y VI de la Ley.

El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del Artículo 27 Fracciones II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en el Artículo 212 de esta Ley.”

¹³ **Artículo 16.-**La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación:

[...]

Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone al alcance general, por cualquier procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares, por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

83. Sobre esta comunicación pública, el autor tiene derecho a percibir una regalía conforme al artículo 26 bis de la Ley de la materia, misma que ha de ser pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública.
84. El artículo 149 de la referida ley prevé que podrán utilizarse o ejecutarse las obras artísticas sin autorización, en tiendas o establecimientos abiertos al público, siempre y cuando no haya cargos de admisión y que dicha utilización tenga el único propósito de promover la venta de ejemplares de las obras.
85. Es decir, la propia ley permite que no se obtenga autorización para ejecutar obras en establecimientos abiertos al público, y que no se paguen las regalías correspondientes, si se cumplen dos condiciones: **1.** Que no se cobren cargos de admisión al lugar; y, **2.** Que la ejecución de las obras tenga el único fin de promover la venta de ejemplares de las mismas.
86. El artículo 10 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que las regalías por comunicación realizada **con fines de lucro directo o indirecto** se generarán a favor de las y los autores, titulares de derechos conexos o de sus titulares derivados¹⁴.
87. Por su parte, el artículo 11 del citado reglamento establece que se **entiende la comunicación realizada con fines de lucro directo**, la actividad que tenga por objeto la obtención de un beneficio económico como consecuencia inmediata del uso o explotación de los derechos de autor, derechos conexos o reservas de derechos, la utilización de la

¹⁴ Artículo 10.- Las regalías por comunicación, transmisión pública, puesta a disposición, ejecución, exhibición o representación pública, de obras literarias o artísticas, así como de las interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros o emisiones, realizadas con fines de lucro directo o indirecto, se generarán a favor de los autores, titulares de derechos conexos o de sus titulares derivados.

imagen de una persona o la realización de cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de cómputo.

88. Mientras que se reputará realizada **con fines de lucro indirecto** su utilización cuando resulte en una ventaja o atractivo adicional a la actividad preponderante desarrollada por el agente en el establecimiento industrial, comercial o de servicios de que se trate. Finalmente, no será condición para la calificación de una conducta o actividad el hecho de que **se obtenga o no el lucro esperado**¹⁵.

89. En ese sentido, cuando la ley señala que la indemnización será sobre ***el precio al público de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación al derecho de autor*** se refiere al total de los ingresos que obtiene el establecimiento con motivo de las **actividades que incluyen el uso de contenido audiovisual protegido por el derecho de autor**, incluidos, por mencionar algunos, la tarifa de hospedaje o la venta de alimentos. Lo anterior, pues esa actividad tiene fines de lucro indirecto, en la medida que la utilización de la música resulta en una ventaja o atractivo adicional, además de que la actividad preponderante del establecimiento comercial es precisamente el entretenimiento mediante la reproducción de obras musicales.

¹⁵ **Artículo 11.-** Se entiende realizada con fines de lucro directo, la actividad que tenga por objeto la obtención de un beneficio económico como consecuencia inmediata del uso o explotación de los derechos de autor, derechos conexos o reservas de derechos, la utilización de la imagen de una persona o la realización de cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de cómputo. Se reputará realizada con fines de lucro indirecto su utilización cuando resulte en una ventaja o atractivo adicional a la actividad preponderante desarrollada por el agente en el establecimiento industrial, comercial o de servicios de que se trate. No será condición para la calificación de una conducta o actividad el hecho de que se obtenga o no el lucro esperado.

90. Lo anterior se robustece si consideramos que el artículo 1° de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que su objeto es la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, así como la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus fonogramas o videogramas¹⁶.
91. Es por ello que el legislador estableció una serie de mecanismos de protección a los derechos de los autores, entre ellas, que deben percibir regalías por el uso o reproducción de sus creaciones. Ante la violación de dichos derechos, se establecieron también consecuencias, como es el pago de una indemnización en términos del artículo 216 bis de la Ley del Derechos de Autor.
92. Ante una violación a un derecho, esta Primera Sala ha determinado que el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización como medida resarcitoria por los daños ocasionados¹⁷.

¹⁶ **Artículo 1.** La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto **la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores**, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

¹⁷ Sirve de apoyo al respecto la jurisprudencia 1a./J. 31/2017 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, abril de 2017, Tomo I, página 752, cuyo rubro y texto disponen: **“DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE.** *El derecho citado es un derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor de los gobernados, por lo que no debe restringirse innecesariamente. Ahora bien, atento a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe*

93. De manera que, establecer la indemnización sobre un porcentaje del costo original de la licencia durante el mes en que se transmitió el contenido audiovisual protegido por los derechos de autor, sin tomar en cuenta los demás servicios que presta y comercializa el hotel, aprovechando la ventaja o atractivo adicional que tales obras producen, no se compadecería de esa salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación y de los derechos de autor.
94. En ese sentido, establecer el porcentaje de la indemnización por violación a los derechos de autor, sin tomar en cuenta otros elementos que forman parte del precio de venta al público ofertado por el infractor, tiene como consecuencia que no se repare de manera integral el derecho violado al autor o autora de una obra, pues el prestador del servicio obtiene ganancias por las diversas amenidades que ofrece que tienen relación con la transmisión de obras respecto de la cual no tenía el derecho de comunicar o ejecutar públicamente.
95. Considerarlo así, desincentivaría la celebración de convenios con las autoras y los autores para pactar el pago de regalías en términos del artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor¹⁸; aunado a que,

generar una ganancia a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento adecuado. En ese sentido, el derecho moderno de daños mira a la naturaleza y extensión del daño a las víctimas y no a los victimarios. Así, el daño causado es el que determina la naturaleza y el monto de la indemnización, de forma que las reparaciones no pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores; además, no se pretende que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Por otro lado, una indemnización será excesiva cuando exceda del monto suficiente para compensar a la víctima, sin embargo, limitar la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada; esto es, una indemnización es injusta cuando se le limita con topes o tarifas, y en lugar de ser el Juez quien la cuantifique justa y equitativamente con base en criterios de razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del caso, es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad.

¹⁸ “**Artículo 26 bis.** El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio....

como ya se ha precisado en esta ejecutoria, si tomamos en cuenta la interpretación que el colegiado imprimió a la norma, la consecuencia de no respetar los derechos de autor sería mínima para el infractor, ante una indemnización relativamente menor, al excluirse otros ingresos que se obtuvieron violando la ley, pero que forman parte del servicio (lucro indirecto).

96. Sin que dicha indemnización resulte desproporcional o exorbitante, pues se enfoca en la conducta infractora y el daño causado y su base es el precio del producto o servicio original, dejando fuera cualquier otro aspecto, sino únicamente lo relacionado con la violación a los derechos de autor y al lucro directo o indirecto obtenido con esa conducta; máxime si se toma en consideración que el propio artículo 216 Bis multicitado, establece que si no es posible determinar un precio al servicio original prestado, se podrá acudir a la opinión de peritos para establecer dicho precio o valor de ese servicio, en cuyo dictamen se deben tomar en cuenta los elementos fijados en esta ejecutoria, es decir, todos aquellos elementos que convergen en la violación al derecho de autor.
97. Similares consideraciones fueron vertidas por esta Primera Sala al resolver el Amparo Directo en Revisión *********, en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.
98. En las relatadas circunstancias y al resultar fundados los agravios expresados por la recurrente, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y devolver los autos del asunto al Tribunal Colegiado del conocimiento para que aborde nuevamente el fondo del asunto, estudiando los conceptos de violación a partir de las consideraciones

[...]

El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras...”.

vertidas a lo largo de la presente ejecutoria.

99. Por lo expuesto y fundado, esta Primera Sala,

R E S U E L V E:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del conocimiento, para los efectos precisados en esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de las Señoras y los Señores Ministros: Norma Lucía Piña Hernández quien está con el sentido, pero contra consideraciones y además, se reserva su derecho a formular voto concurrente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat.

Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA

MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

PONENTE

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

MTRO. RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

“En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110 Y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.